

Tinta Socialista



**La realidad es
testaruda y poco a
poco coloca en su
justa dimensión la
política represiva en
nuestro país**

La situación política de nuestro país se encuentra marcada por una crisis política del régimen que cada vez adquiere mayor agudeza; la corrupción, el desfalco de las arcas públicas, el cuestionamiento del sistema de partidos electorales y la represión como política de gobierno son expresiones claras que el régimen neoliberal atraviesa por momentos críticos producto de la crisis económica capitalista que no toca fondo.

Conforme avanza el tiempo, el escenario se ve cada vez más adverso, a nivel internacional la cumbre de los G20 se muestra como un mecanismo diplomático de dominio donde se pretende definir el rumbo que seguirá

Pensamiento y acción del FNLS

la situación mundial, proceso que está marcado por la intención de delimitar los bandos económicos, para que las potencias imperialistas puedan “cerrar filas”, ante el hartazgo social se avecina por los resultados nefastos de la política neoliberal en el mundo.

A nivel nacional los gobernadores celebraron un aniversario más de la conformación de la CONAGO, una estructura política que se diseñó para establecer una estrategia de guerra con la argucia que ha servido para encubrir el cometido de crímenes contra el pueblo, el combate a la delincuencia organizada y para la seguridad nacional, con esta premisa, los representantes de los ejecutivos estatales pretenden conformar un cuerpo policiaco especial que obedezca a esta estructura política.

Ambos cónclaves, nacional e internacional, fijan posición ante el inminente crecimiento del descontento popular, sobre las agendas particulares se establece que la lucha es contra el “terrorismo, la delincuencia y la corrupción”; además de incorporar como premisas particulares los aspectos económicos, en el caso concreto con México, la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).

Todo este panorama se advierte convulso porque técnicamente la carrera electoral rumbo al 2018 ya comenzó, de tal manera que cada aspirante acusa mutuamente al otro de cometer irregularidades, mientras tanto la realidad nos dice que no hay acusación que pueda hacer un político de oficio, sin auto señalarse, porque la corrupción es un mal inherente al régimen neoliberal, que hoy se encuentra en una etapa de descomposición.

Ante este escenario los crímenes de lesa humanidad y de Estado no disminuyen, conforme pasa el tiempo, éstos se incrementan exponencialmente; diariamente los medios de información dan parte del terror que cifran las víctimas varias decenas por día.

Es importante la información que hoy dan a conocer algunas organizaciones de derechos humanos en el norte de país, particularmente en el estado de Coahuila, donde se abre un expediente sobre “los graves crímenes cometidos por el Estado mexicano”, se identificó que existe una política de parte de una estructura del Estado de permitir y apoyar activamente un ataque contra la población civil. Señalan que los crímenes fueron cometidos directamente por las fuerzas especiales.

Esta denuncia será retomada por la Corte Penal Internacional (CPI), mediante una solicitud realizada por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), para abrir un expediente “sobre las graves crímenes cometidos por el Estado mexicano”, de manera particular en esta entidad federativa.

Tal conclusión no es sorpresa para algunos, porque desde hace varios años se denunció que los crímenes de lesa humanidad tienen patente en el Estado mexicano y que los denominados grupos de la delincuencia organizada, son en verdad el ariete represivo por el cual se objetiva el terrorismo de Estado, sin embargo, aún quedan resquicios para abandonar ese discurso que sólo beneficia a las instancias gubernamentales, de sostener que son tal o cual “cartel” de la droga, no debemos perder de vista que éstos grupos son organizados y estructurados desde y para el Estado, por tanto, independientemente de quién esté en la silla presidencial esta política se comete sexenio tras sexenio.

Desde el gobierno de Felipe Calderón se documentó el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFFE), casi íntegramente pasaron a formar una estructura paramilitar para sembrar el terror en la población, sus crímenes se presentaron con distinta firma, pero su actuar develaba una forma táctica de contrainsurgencia. Hoy se sabe que en Coahuila fue el Grupo de Reacción Inmediata, el Grupo de Armas y Tácticas Especiales, y el Grupo de Reacción y Operaciones Mixtas, quienes objetivaron el terrorismo de Estado en esta entidad norteña.

Lo que hoy fue posible documentar en Coahuila no es la excepción, en todo el país se sigue la misma lógica; el hilo conductor que une a los denominados “grupos de la delincuencia organizada” y el Estado mexicano paulatinamente se empieza a descubrir; es a fuerza de testimonio de las víctimas y de sus familiares que se evidencia que en cada detenido desaparecido, en cada ejecutado extrajudicialmente, en mayor o en menor medida, se encuentra la mano del ejército mexicano, de la

marina y las distintas policías.

La ejecución extrajudicial de Meztli Sarabia Reyna de la UPVA en Puebla es un indicativo más de lo que aquí se afirma, el comando de cuatro sujetos que le privaron de la vida actuaron con toda impunidad que sólo el Estado mexicano puede garantizar, además que en su retirada dejaron evidencia que esta “operación” fue ejecutada por elementos del ejército mexicano.

Desde marzo de este año y posteriormente en mayo, denunciemos la existencia de una red de espionaje y táctica contrainsurgente en el estado de Chiapas, que incluye desde militares en activo, supuestos periodistas y funcionarios de gobierno; en los funerales de Meztli son descubiertos nuevamente militares vestidos de civil; y nuestros compañeros en Puebla descubrieron, durante un mitin, a otro militar que documentaba desde su celular la actividad política, lo que nos comprueba que esta forma de actuar es una política general de gobierno.

La realidad es testaruda y poco a poco coloca en su justa dimensión la magnitud de la política represiva en nuestro país, donde existe la premeditación para el cometido de cientos de crímenes; donde el objetivo son las organizaciones populares y el pueblo en general.

Con esta denuncia se abona a desenmascarar el gobierno federal como el responsable de clima de violencia que azota a todo el país, que desangra considerablemente a las masas trabajadoras, por lo que nada es casualidad ni hechos aislados, en cada crimen que se comete, independientemente del tiempo y espacio, conforma el testimonio cruel del terrorismo de Estado como política de gobierno.

Política sistemática, porque lo mismo se ejecuta contra el normalismo rural, contra organizaciones populares, defensores de los derechos humanos y pueblo en general; el objetivo es detener a sangre y fuego el descontento popular, intentar desarticular todo esfuerzo organizativo e inhibir la creatividad de las masas ante un escenario adverso.

Ante este panorama de agudización de la represión, queda claro que al movimiento popular en su conjunto nos queda la tarea de sistematizar toda la experiencia de lucha para hacer frente a esta oleada de violencia institucional, definir creativamente las formas y métodos de organización que nos harán salir abantes en este clima funesto.

El Estado mexicano pretende hacernos olvidar de los miles de detenidos desaparecidos con el cometido de crímenes de la misma naturaleza, sin embargo, hoy sus nombres se encuentran en lo más alto de las exigencias; pretende socavar la dignidad humana para dejar de brindar la solidaridad a los familiares.

A pesar de la represión no se nos olvida que la exigencia de presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya del PDPR-EPR; del compañero Fidencio Gómez Sántiz del FNLS; Daniela y Virginia Ortiz Ramírez del MULT; Teodulfo Torres Soriano; los 43 normalistas de Ayotzinapa; y los más de 300 mil detenidos desaparecidos.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

JS